



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SESIÓN PÚBLICA NÚM. 78 ORDINARIA

LUNES 28 DE AGOSTO DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta y tres minutos del lunes veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número setenta y siete ordinaria, celebrada el jueves veinticuatro de agosto del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lunes veintiocho de agosto de dos mil diecisiete:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**I. 38/2017 y
acs.
39/2017 y
60/2017**

Acción de inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas 39/2017 y 60/2017, promovidas por los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y MORENA, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política y del Código Electoral y de Participación Social, ambos del Estado de Jalisco, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el dos de junio de dos mil diecisiete, mediante Decretos 26373/LXI/17 y 26374/LXI/17. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: *“PRIMERO. Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 38/2017, 39/2017 y 60/2017. SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 38/2017, respecto del numeral 1, fracción IV, del artículo 15; del numeral 1, fracciones III y IV y, numeral 3, del artículo 19; del numeral 1, del artículo 20; del numeral 1, del artículo 21; y, del numeral 1, del artículo 22, todos del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. TERCERO. Se reconoce la validez del el Decreto número 26374/LXI/17, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, en los términos del considerando séptimo de este fallo. CUARTO. Se reconoce la validez de los artículos 74, fracción IX, en la porción normativa que dice “salvo que se trate de regidores que buscan reelegirse.”; y, 75, en la porción normativa que dice “votación total emitida” bajo la interpretación conforme precisada en el considerando décimo primero; ambos de la*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constitución Política del Estado de Jalisco. Así como, de los artículos 11, numeral 1, fracción IX y, 253, numeral 2, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, bajo la interpretación conforme precisada en el considerando noveno de esta sentencia. QUINTO. Se declara la invalidez de los artículos 13, párrafo cuatro, base IV, incisos a), en la parte normativa que dice: “Los partidos políticos nacionales que mantengan su acreditación en el estado después de cada elección, tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal para financiar los gastos de las actividades ordinarias por lo que en los años que no se celebren elecciones en el estado, se fijará anualmente multiplicando el padrón electoral local, por el veinte por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. En años electorales el financiamiento para actividades ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de los votos válidos obtenidos en la elección a diputados, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior;” y b); 73,



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

fracción II, párrafo tercero; 75, en la porción normativa que dice “En el caso de los partidos políticos se requerirá adicionalmente que hubieren registrado planillas en el número de ayuntamientos que determine la ley”; todos de la Constitución del Estado de Jalisco. Así, como los artículos 5°, numeral 1, en la porción normativa que dispone “...en candidaturas a presidencias municipales,”; 24, numeral 3, párrafo tercero; 89, numeral 2; 253, numeral 1; y 612, numeral 1, en la porción normativa que dice: “sin que sea válida representación alguna”; todos Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. SEXTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la precisión de los preceptos impugnados, a la oportunidad y a la legitimación, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando quinto, relativo a las causas de improcedencia.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En su apartado I, el proyecto propone sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 38/2017, respecto de los artículos 19, párrafos 1, fracciones III y IV, y 3, 20, párrafo 1, 21, párrafo 1, y 22, párrafo 1, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, por extemporaneidad, dado que no fueron objeto de reforma en el Decreto impugnado.

En su apartado II, consistente en no sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 60/2017, respecto del artículo 74, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, dado que no se trata de un nuevo acto legislativo que implique una cesación de efectos por no haber una modificación sustantiva o material, sino que únicamente modificó un supuesto relativo a que el funcionario encargado de la hacienda municipal debe haber rendido sus cuentas públicas. Anunció que personalmente votaría en contra de este apartado.

En su apartado III, el proyecto propone sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 38/2017, respecto del artículo 15, párrafo 1, fracción IV, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, dado que no se esgrimieron conceptos de invalidez.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó de acuerdo con el proyecto, excepto en su apartado II, del cual no compartió las consideraciones sobre el acto legislativo nuevo, por lo que formulará un voto concurrente.



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó en contra de la propuesta del artículo 74, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, al estar en contra del criterio mayoritario del nuevo acto legislativo.

La señora Ministra Piña Hernández concordó con los señores Ministros Luna Ramos y Pardo Rebolledo, al no compartir el criterio mayoritario del nuevo acto legislativo, por lo que se actualiza la cesación de efectos del artículo 74, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y, por ende, votará en contra del proyecto.

El señor Ministro Medina Mora I. se pronunció a favor del proyecto en su apartado II, en tanto que no se llevó a cabo una modificación sustantiva o material del artículo 74, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se pronunció por sobreseer respecto del artículo 74, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, sin pronunciarse sobre si la modificación es sustantiva o no, sino que basta con que haya sido materia del proceso legislativo. En el caso, estimó que se modificó sólo una parte, pero hay motivo suficiente para la cesación de efectos conforme al artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto para eliminar las referencias al proceso legislativo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando quinto, relativo a las causas de improcedencia, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los apartados I y III, consistentes, respectivamente, en sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 38/2017, en relación con los artículos 19, párrafos 1, fracciones III y IV, y 3, 20, párrafo 1, 21, párrafo 1, y 22, párrafo 1, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, y sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 38/2017, en relación con el artículo 15, párrafo 1, fracción IV, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.

Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz separándose de algunos elementos, Franco González Salas difiriendo de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado II, consistente en no sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 60/2017, en relación con el artículo 74, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Los señores Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Presidente Aguilar Morales votaron en contra.

*Sesión Pública Núm. 78**Lunes 28 de agosto de 2017*PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. El señor Ministro Medina Mora I. reservó su derecho de formular voto concurrente.

El señor Ministro Franco González Salas anunció voto concurrente general.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho de formular voto concurrente general.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando sexto, relativo a la precisión de los temas diversos abordados en la ejecutoria. El proyecto delimita los temas que se analizarán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando sexto, relativo a la precisión de los temas diversos abordados en la ejecutoria, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando séptimo, relativo a los vicios del procedimiento legislativo. El proyecto propone determinar que no se actualizan esas violaciones, pues fueron observados los requisitos legales para una dispensa de trámite urgente,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Máxime que el inminente inicio del siguiente proceso electoral en la entidad justificaba la urgencia en la aprobación de la legislación local, con el objeto de contar con reglas claras al inicio del proceso, con independencia de la etapa en que tuvieran aplicación.

Por lo que ve al requisito de hacer llegar con antelación a los diputados del congreso el dictamen relativo a las reformas aprobadas, conforme a precedentes, se indica que se cumplió con los requisitos legales, dado que los diputados tuvieron conocimiento cierto de su contenido sin que fuera necesario que se les hicieran llegar los dictámenes relativos, pues se precisa que, según la legislación aplicable, no existía obligación de hacerlo como se refiere, aunado que fue el propio órgano legislativo el que previamente —en sesión de primero de junio de dos mil diecisiete— aprobó las citadas reformas constitucionales, por lo que es evidente que tenían conocimiento pleno previo del contenido de tales preceptos de la Constitución local.

El señor Ministro Cossío Díaz sugirió invocar un criterio, referente a que los promoventes son quienes deben acreditar las violaciones legislativas, así como eliminar la condición del inminente proceso electoral que justifica el procedimiento legislativo de urgencia, contenida en el párrafo segundo de la página ciento diecisiete del proyecto. Apuntó que su criterio quedaría a salvo con un voto concurrente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto para eliminar la condición del inminente proceso electoral que justifica el procedimiento legislativo de urgencia, contenida en el párrafo segundo de la página ciento diecisiete del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando séptimo, relativo a los vicios del procedimiento legislativo, consistente en reconocer la validez del proceso legislativo que culminó con la emisión de los decretos impugnados, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto concurrente.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando octavo, relativo al financiamiento público de los partidos nacionales. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 13, fracción IV, inciso a), en la porción normativa "Los partidos políticos nacionales que mantengan su acreditación en el estado después de cada elección, tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal para financiar los gastos de las actividades ordinarias por lo que en los años que no se celebren elecciones en el estado, se fijará anualmente multiplicando el padrón electoral local, por el veinte por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y



Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. En años electorales el financiamiento para actividades ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de los votos válidos obtenidos en la elección a diputados, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Lo anterior, en razón de que, conforme con el precedente de la acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas, los legisladores locales tienen competencia para regular el financiamiento para los partidos, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional, y se retoma el precedente de la acción de inconstitucionalidad 5/2015, en cuanto a que, por lo que refiere al financiamiento público que se establece para los partidos políticos nacionales que mantengan su acreditación en el Estado después de cada elección, cobra relevancia el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, en cuanto prevé que las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos nacionales que hayan obtenido el tres por ciento de la votación válida



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate se establecerán en las legislaciones locales respectivas.

Se recapitula que las entidades federativas tienen margen de configuración legislativa, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional, que dispone que la legislación estatal debe garantizar que los partidos políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales. También, se alude que el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, tratándose del financiamiento local para partidos políticos nacionales, contiene una limitante más a dicha libertad de configuración, en el sentido de que las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.

Se concluye que el modelo implementado en la norma impugnada no es acorde con los artículos 116, fracción IV, inciso g), constitucional, dado que no resulta equitativo con el previsto para los partidos políticos locales, ni se armoniza con lo estipulado en los artículos 23 y 51, numeral 1, fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de que se distorsiona el modelo de financiamiento. Se agrega que, mediante la norma impugnada, se reduce únicamente el financiamiento de los partidos nacionales, sin que exista



Justificación clara para tal diferencia, volviéndola inequitativa al introducir elementos ajenos a los previstos en la Constitución Federal y en la Ley General de Partidos Políticos para el cálculo del monto total del financiamiento público a distribuir entre los partidos políticos, esto es, mientras dichos parámetros establecen que deberá realizarse tomando como base el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, con fecha de corte a julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Medida y Actualización; el precepto que se impugna prevé dos distintas bases: 1) número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, por el veinte por ciento de la Unidad de Medida y Actualización, y 2) el número total de votos válidos, obtenidos en la elección de diputados, por el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Medida y Actualización.

Se añade que el precepto impugnado no persigue el objetivo de reducir los costos de las elecciones y el gasto público, sino que provoca el efecto contrario, en virtud de que, conforme a su texto anterior a la reforma, el monto total de financiamiento, obtenido de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Medida y Actualización, era distribuido entre todos los partidos políticos contendientes, tanto nacionales, como locales, y con esa base se calculaban igualmente los demás montos; mientras que, tras su reforma, a partir de bases distintas y sin establecer



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

alguna precisión, se entiende que se prevé un financiamiento total obtenido igualmente de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local por el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Medida y Actualización, para ser distribuido ahora —toda esa bolsa— únicamente entre los partidos políticos locales y, además, se establece otra nueva bolsa que será asignada a los partidos políticos nacionales.

Se destaca que el vicio de inconstitucionalidad no alcanza al diverso artículo 13, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política del Estado de Jalisco, dado que únicamente establece los porcentajes para el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto, los cuales no fueron cuestionados y se trata de un aspecto que entra en la libre configuración de las entidades federativas, siempre y cuando no sean desproporcionales o inequitativos. En el caso, se adoptó el mismo modelo que estableció el artículo 51, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos. Sin embargo, al haberse declarado la inconstitucionalidad del diverso inciso a), deja de tener sustento el inciso b); por lo que, en vía de consecuencia, se propone declarar su invalidez, para el efecto que el propio Constituyente permanente local armonice el sistema normativo que se encuentra previsto.

Asimismo, el artículo 89, párrafo 2, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco tampoco adolece del mismo vicio de inconstitucionalidad señalado;



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

pero, en vía de consecuencia debe declararse su invalidez, porque hace referencia a la disposición que se ha considerado contraria a la Constitución y que se ha invalidado previamente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sugirió que las declaraciones de invalidez, en vía de consecuencia, se analicen en el considerando de efectos.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto con la sugerencia realizada.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en contra porque el artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional contiene una mayor libertad configurativa a las entidades federativas de lo que el proyecto asume. Opinó que el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos no podría afectar esta configuración prevista en la Constitución, dada una jerarquía de validez de la ley, respecto de la Constitución.

Reconoció que, si bien en los precedentes citados se determinaron algunos aspectos en cuanto al tema, no compartió la interpretación del citado artículo 23, puesto que si bien establece una limitación específica, no se puede justificar para cualquier cambio al modelo estatal. Tampoco advirtió una distorsión en la equidad de los partidos políticos, en tanto que se debe distinguir el financiamiento a nivel federal del estatal.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Pérez Dayán retomó que el tema es el financiamiento a los partidos políticos nacionales y locales por parte de las entidades federativas. Apuntó que el proyecto, luego de retomar los precedentes que han abordado ese tema, tendentes a favorecer la libertad de configuración de las entidades federativas, concluye en sus párrafos segundo de su página ciento treinta y tres: “De lo que se advierte que si bien, tratándose del financiamiento público para los partidos locales, la Ley General da pautas precisas para su otorgamiento y distribución, en tratándose del financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales, únicamente establece la obligación de otorgarlo, dejando en libertad de configuración a las entidades federativas para establecer las reglas para su otorgamiento, sin que esto pueda verse desligado por completo de las bases que se establecen en el artículo 51 de la propia Ley General, en tanto en la fracción I del numeral 1, se establecen las reglas para que los organismos públicos locales, determinen anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos”, y último de su página ciento treinta y seis: “Así, si bien las entidades federativas gozan de libertad para establecer el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos nacionales que participan en la elección local; lo cierto es que, debe ser acorde con lo que establece el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal y los artículos 23 y 51, numeral 1, fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos; es decir deberá realizarse una distribución equitativa para



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y, no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales; asimismo, deberá ajustarse al monto total por distribuir entre los partidos políticos”.

Indicó que su observación estriba en determinar si se debe privilegiar la libertad de configuración o si ésta realmente no existe y se reduce a establecer lo que señalan las anteriores disposiciones constitucional y de la ley general.

Concluyó que debe prevalecer la libertad de configuración tratándose del financiamiento a los partidos políticos nacionales por parte de las autoridades locales, en tanto el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos apunta que eso se establecerá en las legislaciones locales respectivas y, en cuanto a los partidos políticos locales, esa Ley General establece las fórmulas a través de las cuales se debe entregar este financiamiento.

Estimó que, si bien la expresión “equitativo”, contenida en el artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional, debe ser considerada para la categoría de partidos de la que se esté hablando, esto es, se debe ser equitativo con todos los partidos locales o con todos los partidos nacionales, mas ese calificativo no liga a ambos grupos. Así, indicó que las reglas para determinar el financiamiento de los partidos políticos locales derivan de la Ley General de Partidos Políticos y, por



lo que hace a los partidos políticos nacionales, remite a lo que determinen las Constituciones locales, esto es, la regulación local habrá de ser la que determine la forma de financiar a los partidos nacionales en sus actividades ordinarias.

Subrayó que, en aras de un respeto absoluto del federalismo, los partidos políticos nacionales, que alcancen en sus entidades el tres por ciento, serán constreñidos en su financiamiento en la medida en que los congresos estatales lo determinen. Por tanto, valoró que se debería favorecer la libertad de configuración, como en el caso, que se determinaron las reglas que corresponden al financiamiento estatal para los partidos políticos nacionales, como resultado de una libertad de configuración correcta, pues dio un trato equitativo a todos esos partidos. Por tanto, se pronunció por la validez de la disposición cuestionada.

El señor Ministro Franco González Salas estimó que los precedentes no son exactamente aplicables a este caso, dado que, en aquella ocasión, se analizó que un Estado decidió dar un financiamiento público diferenciado a los partidos políticos nacionales, y recordó que votó separándose de las consideraciones, en tanto que queda a la libre configuración de las entidades federativas establecer su financiamiento para los partidos políticos nacionales, en razón de que no hay disposición expresa en los artículos 41 y 116 constitucionales al respecto, así como en el transitorio segundo de la reforma de febrero de dos mil catorce, sino



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que se otorgan facultades expresas para que se legisle respecto del financiamiento público que deben otorgar las entidades federativas a los partidos políticos nacionales.

Aclaró que no discutiría la parte atinente a la Ley General de Partidos Políticos, en tanto que no fue cuestionada, además de que únicamente se requiere del contraste con la Constitución.

Resaltó que, respecto del problema de equidad, los partidos políticos nacionales tienen más recursos que los locales, dado que también cuentan con financiamiento privado, consecuentemente, no se puede estimar como un problema de falta de equidad el hecho de que, para los partidos políticos nacionales, un Estado les complemente el financiamiento público con lo que considere conveniente erogar para ellos.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea tampoco compartió el proyecto, coincidiendo con el señor Ministro Franco González Salas en que los precedentes no son aplicables; además, se manifestó en contra de la interpretación de los artículos 23 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, en tanto que el 52, párrafo 2, establece la libertad de configuración de las legislaturas locales para establecer el financiamiento local de los partidos políticos nacionales, siendo que el diverso 23, párrafo 1, inciso d), párrafo segundo, prevé que “En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la



entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales”, lo que se refiere a un supuesto específico: no reducir el financiamiento de los partidos políticos nacionales so pretexto del financiamiento federal que ya reciben sus dirigencias nacionales.

Concluyó que los Estados gozan de una libertad de configuración para establecer el financiamiento de los partidos políticos nacionales en elecciones locales, siempre y cuando sea equitativo y resista un análisis de reglas objetivas y aplicables para todos los partidos.

El señor Ministro Laynez Potisek indicó que no se debe soslayar el contenido del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos: “El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales”; mientras que el 52 contempla que “Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

establecerán en las legislaciones locales respectivas”. Consideró que existe una contradicción, pero que no debe analizarse por no haberse impugnado este ordenamiento.

En ese tenor, indicó que el parámetro de validez deberá ser el artículo 116 constitucional, el cual no contiene ninguna regla de distribución, sino únicamente que deberá ser equitativa, por lo que, de la confrontación de la Constitución Federal y el precepto de la Constitución local impugnada, se debe reconocer la libertad configurativa en cuanto al principio de equidad, además de que se debe diferenciar la fuente de financiamiento de los partidos políticos nacionales y locales.

El señor Ministro Medina Mora I. compartió parcialmente el sentido y las consideraciones del proyecto pues, con independencia que se pudiera analizar si la estructura de la norma local establece dos bolsas y el aumento del gasto público, sólo se impugnó el artículo 13, fracción IV, inciso a), de la Constitución local, por lo que no debe haber un pronunciamiento respecto del diverso inciso b), que se plantea en la página ciento treinta y nueve del proyecto.

Concordó con la consideración relativa a la competencia local para legislar sobre financiamiento público local; sin embargo, resulta muy limitada por lo dispuesto en el acápite de la fracción IV del artículo 116, que señala: “De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:”.

Discordó de la consideración del primer párrafo de la página ciento treinta y cuatro, porque no existe razón que justifique la diferencia que se establece y, por consecuencia, el trato inequitativo a los partidos políticos nacionales con acreditación local. Por consecuencia, indicó que el cuadro de las páginas ciento treinta y cinco y ciento treinta y seis también debería comprender a los partidos políticos nacionales, al resultarles aplicable el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. Se apartó de las consideraciones contenidas en el párrafo último de la página ciento treinta y siete y primero de la página ciento treinta y ocho, en virtud de que la inconstitucionalidad es clara, independientemente de lo pretendido por el legislador y su consecución o no de objetivos a través de la medida adoptada.

En ese sentido, propuso declarar la invalidez únicamente la porción normativa “locales” del artículo 13, fracción IV, inciso a), impugnado, y no invalidar su diverso inciso b), ni el artículo 89, numeral 2, del código impugnado. En consecuencia, tampoco habría necesidad de ordenar al Constituyente y al legislador de Jalisco que armonicen el sistema normativo, en tanto que el trato inequitativo se elimina con la invalidez de la porción normativa “locales”.

La señora Ministra Piña Hernández señaló que el artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional, leído



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

aisladamente, no establece un parámetro con la Ley General de Partidos Políticos; sin embargo, concordó con el señor Ministro Medina Mora I. en que prevé que “De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que”, por lo que, para determinar la regularidad constitucional de la norma que se analiza, se debe acudir a dicha ley general. En ese sentido compartiría el esquema del proyecto, mas no su conclusión, al estimar que el artículo 52, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos prevé una libertad configurativa para las entidades federativas en el tema en cuestión.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó de acuerdo con el proyecto, coincidiendo con los señores Ministros Piña Hernández y Medina Mora I., en tanto que el artículo 116 no establece una libertad configurativa, sino que remite al artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos: “1. Son derechos de los partidos políticos: [...] d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables. En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales”.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena concordó con el señor Ministro Laynez Potisek en que, sobre el financiamiento de fuente estatal, necesariamente hay una situación de inequidad entre los partidos nacionales y los locales; además de que un análisis de equidad tendría que tomar en cuenta precisamente si son o no equivalentes un partido nacional respecto de un partido estatal. Estimó que no lo son y, por lo mismo, la norma válidamente busca descontar recursos estatales a los partidos nacionales porque ya reciben financiamiento nacional, lo que además permite una experimentación por parte de las entidades federativas de una manera distinta de financiar y promover a los partidos políticos locales, lo que entra dentro del marco de la libre configuración que adopta la Constitución en esta materia. Por lo tanto, estaría en contra del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se pronunció en favor del proyecto, por las consideraciones expresadas por los señores Ministros Luna Ramos, Medina Mora I. y Piña Hernández.

La señora Ministra Piña Hernández aclaró estar por la validez de la norma, con conclusiones diferentes a las del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando octavo, relativo al financiamiento público de los partidos nacionales, consistente en declarar la invalidez del artículo 13, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política del Estado de



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Jalisco, respecto de la cual se expresó una mayoría de siete votos en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Laynez Potisek y Pérez Dayán. Los señores Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales votaron a favor.

Dada la votación alcanzada y el ofrecimiento del señor Ministro ponente Pardo Rebolledo de formular el engrose en consecuencia, la votación definitiva deberá indicar:

Por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Laynez Potisek y Pérez Dayán, se reconoció la validez del artículo 13, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Jalisco, respecto del considerando octavo, relativo al financiamiento público de los partidos nacionales, por lo que ve al primer concepto de invalidez. Los señores Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales votaron en contra.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo aclaró que, respecto del considerando octavo, relativo al financiamiento público de los partidos nacionales, se esgrimieron otros tres argumentos, por lo que, dado el reconocimiento de validez del artículo 13, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Jalisco decretado, su propuesta de respuesta será la siguiente:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En cuanto al segundo concepto de invalidez, en el que el Partido Verde Ecologista considera que el artículo en cuestión es inconstitucional por establecer que, en años no electorales, el financiamiento público para partidos políticos para actividades ordinarias, recibirán la cantidad que resulte del padrón electoral local por el veinte por ciento de la unidad de medida de actualización; se propone determinar que no se especifica de cuál corte o de qué año se alega que hay imprecisión en esta norma, por lo que resultaría infundado pues, si bien el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos establece que el número de inscritos en el padrón electoral será a la fecha de corte de julio de cada año, la falta de establecimiento de corte en la norma combatida no genera incertidumbre, dado que debe entenderse que será a la fecha misma de su aplicación, lo que tampoco se contrapone con la regla del citado artículo, además de que es un aspecto que entra en la libertad de configuración legislativa de la entidad.

Estimó que los señores Ministros que votaron en el sentido de que el primer concepto de invalidez resultaba fundado, deberían abstenerse de votar en la calificación de los restantes conceptos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales estimó que todos deberán pronunciarse, pues no se deben abstenerse de votar en este tipo de asuntos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó de acuerdo con la propuesta de declarar infundado el concepto de invalidez.

El señor Ministro Franco González Salas se expresó de acuerdo, reservando un voto concurrente a la vista del engrose.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando octavo, relativo al financiamiento público de los partidos nacionales, consistente en declarar infundado el segundo concepto de invalidez, hecho valer por el Partido Verde Ecologista, la cual se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo obligado por la mayoría, Piña Hernández, Medina Mora I. obligado por la mayoría, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales obligado por la mayoría. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra. Los señores Ministros Cossío Díaz y Franco González Salas reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó la propuesta modificada del considerando octavo, relativo al financiamiento público de los partidos nacionales, en su parte tercera.

En cuanto al tercer concepto de invalidez, en el que se considera que el artículo en cuestión es inconstitucional por



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

establecer el derecho a recibir financiamiento para los partidos políticos que hayan obtenido el tres por ciento en la elección de diputados, sin especificar si es en la de diputados por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, además de que no señala de qué año; se propone determinar que es infundado, dado que, si bien el precepto no establece tal cuestión, no existe la imprecisión a la que hace referencia porque, si bien se establece que se trata de años electorales y que el financiamiento para actividades ordinarias se fijará anualmente multiplicando el número total de los votos válidos obtenidos en la elección a diputados, ello no genera incertidumbre, debido a que, conforme al artículo 15, fracción II, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, la votación válida emitida es la que resulte de deducir, de la votación total emitida, los votos nulos y los de candidatos no registrados; además, si no se especifica si se refiere a diputados por mayoría relativa o representación proporcional, se debe estar al entendimiento de que se refiere a la totalidad de la votación válida emitida en la elección a diputados.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando octavo, relativo al financiamiento público de los partidos nacionales, consistente en declarar infundado el tercer concepto de invalidez, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos obligada por la mayoría, Franco González



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo obligado por la mayoría, Piña Hernández, Medina Mora I. obligado por la mayoría, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales obligado por la mayoría.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó la propuesta modificada del considerando octavo, relativo al financiamiento público de los partidos nacionales, en su parte cuarta.

En cuanto al cuarto concepto de invalidez, en el que se considera que el artículo en cuestión es inconstitucional porque existe una antinomia entre lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la Constitución local y el diverso 89, párrafo 2, del código electoral local, en tanto que el primero remite a la Ley General de Partidos Políticos para el financiamiento de los partidos políticos, y el segundo dispone que, para los nacionales, sólo aplica la legislación local; se propone declararlo infundado, ya que, si bien la remisión a la ley general sólo es para los partidos políticos locales, el diverso artículo 89 sólo se refiere al financiamiento privado de los partidos políticos nacionales, por lo que no existe antinomia alguna.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando octavo, relativo al financiamiento público de los partidos nacionales, consistente en declarar infundado el cuarto concepto de invalidez, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Luna Ramos obligada por la mayoría, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo obligado por la mayoría, Piña Hernández, Medina Mora I. obligado por la mayoría, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales obligado por la mayoría. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cossío Díaz anunciaron sendos votos concurrentes.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando noveno, relativo a la paridad horizontal en la elección de ayuntamientos. El proyecto propone, en su primera parte, declarar la invalidez de los artículos 73, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 5, párrafo 1, en la porción normativa “en candidaturas a presidencias municipales,” y 24, párrafo 3, párrafo tercero, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, retomándose las consideraciones de las acciones de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas, 45/2015 y sus acumuladas, 126/2015 y su acumulada, y 129/2015 y sus acumuladas, en las que se sostuvo que no resulta posible aplicar un principio de paridad de género horizontal respecto de uno de los cargos que integran el órgano municipal, como la presidencia municipal, puesto que el principio constitucional de paridad de órgano pretende que tenga las mismas oportunidades de acceso para la integración del órgano representativo, mas no el acceso a un cargo específico y, por tanto, esos preceptos violan los artículos 35, fracción II, 116, fracción IV, inciso b), y 133 constitucionales.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena no compartió el proyecto al valorar que la paridad horizontal, si bien no es exigida por la Constitución, es una medida que pueden válidamente adoptar las entidades federativas en su libertad de configuración, por tanto, en el caso, estimó que se trata de una acción afirmativa no prohibida por la Constitución.

La señora Ministra Piña Hernández concordó con el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, agregando que la paridad de género prevista en el artículo 41, base I, constitucional es una regla constitucional de integración de los órganos representativos federales y locales, pero ese mandato no se agota en esta regla de configuración de la representatividad democrática, sino que la paridad de género debe ser entendida de manera amplia, interpretada a la luz del artículo 1º constitucional y del orden convencional en la materia, por lo que consideró que la exigencia de garantizar la paridad de género vertical en la integración de los ayuntamientos, es necesaria, pero no suficiente para asegurar el acceso a cargos específicos al interior de la planilla, pues puede traducirse en una barrera de acceso a determinadas funciones públicas para las mujeres; por ello, para lograr una verdadera igualdad política, se deben adoptar medidas que conlleven a la incorporación de las mujeres a cada uno de los cargos al interior del régimen municipal, como ha votado en diversos precedentes. En ese tenor, estimó que, para el caso de la presidencia municipal, aplica la paridad de género horizontal, lo cual deberá determinar cada legislación, máxime que no hay un principio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que prohíba que el legislador local prevea una paridad horizontal. En ese contexto, estaría en contra del proyecto y por la validez del artículo impugnado.

El señor Ministro Pérez Dayán se posicionó en favor del proyecto, resaltando que en los precedentes invocados se analizó la omisión sobre la paridad horizontal, y se determinó que era la voluntad del Constituyente privilegiar la paridad de género en aquellos sistemas en los que se presenten listas, mas la Constitución también reconoce el caso de la reelección, por lo que la paridad horizontal en cargos uninominales —como la presidencia municipal— en la fórmula de reelección, conllevaría a distorsiones, esto es, en el ánimo de equilibrar por género una cámara, se romperían otros principios fundamentales de la democracia, como el respeto al voto público y el derecho a ser reelecto.

El señor Ministro Medina Mora I. no compartió el proyecto, al considerar que los precedentes se refieren a omisión y, en este caso, el hecho de que una legislatura local adopte el principio de paridad de género, en sus dos vertientes —vertical y horizontal— no es inconstitucional en sí mismo, dado que están en su libertad de configuración, por lo que votará por la validez de los preceptos.

La señora Ministra Luna Ramos apuntó que el artículo 41 constitucional establece la paridad de género en órganos legislativos, mas no se refiere a los ayuntamientos; sin embargo, en los precedentes invocados se impugnó que las constituciones o las leyes electorales locales no establecían



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la paridad horizontal, aun estableciéndose la paridad vertical en materia de ayuntamientos. En el caso, sucede a la inversa, puesto que se estableció la paridad horizontal y, si bien la Constitución no trata el tema, si el Estado legisló una acción positiva para lograr la paridad horizontal, no es inconstitucional, dado que establece la posibilidad de que más mujeres puedan acceder a los puestos de elección popular en los ayuntamientos y, fundamentalmente, en las presidencias municipales, por lo que los preceptos resultan constitucionales y válidos.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea discordó del proyecto, recordando que en los precedentes citados se manifestó en contra de las consideraciones y elaboró votos en el sentido de que el artículo 41 constitucional establece una base mínima, pero no hay impedimento, sino incluso hay una obligación, para que los Estados adopten medidas tendentes a lograr la igualdad material entre el hombre y la mujer. Por ello, si bien ha sostenido que hay libertad de configuración para integrar otras formas de paridad política y representativa, al mismo tiempo existe un mandato constitucional de igualdad entre el hombre y la mujer, para que, dentro de esa libertad de configuración los Estados, vayan asumiendo medidas para lograr dicha igualdad material; para romper ese techo de cristal que impide que las mujeres participen tanto en la vida política como en la vida social, empresarial y educativa, entre otras, en igualdad de circunstancias con los hombres, por lo que votará en contra del proyecto.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recordó haber votado en favor de la paridad de género vertical y horizontal, como en los precedentes de los estados de Zacatecas, Puebla y Tlaxcala, por lo que mantuvo su postura.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo sostuvo el proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando noveno, relativo a la paridad horizontal en la elección de ayuntamientos, consistente en declarar la invalidez de los artículos 73, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 5, párrafo 1, en la porción normativa “en candidaturas a presidencias municipales,” y 24, párrafo 3, párrafo tercero, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, respecto de la cual se expresó una mayoría de seis votos en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron a favor. El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto concurrente. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto particular.

Dada la votación alcanzada y el ofrecimiento del señor Ministro ponente Pardo Rebolledo de formular el engrose en

*Sesión Pública Núm. 78**Lunes 28 de agosto de 2017*

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

consecuencia, con las argumentaciones vertidas durante la discusión, la votación definitiva deberá indicar:

Por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales, se reconoció la validez de los artículos 73, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 5, párrafo 1, en la porción normativa “en candidaturas a presidencias municipales,” y 24, párrafo 3, párrafo tercero, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, respecto del considerando noveno, relativo a la paridad horizontal en la elección de ayuntamientos. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente. La señora Ministra Piña Hernández reservó su derecho de formular voto concurrente. El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto particular.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando décimo, relativo a la exigencia para separarse del cargo, en caso de reelección, de presidentes y síndicos municipales. El proyecto propone reconocer la validez de los artículos 74, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 11, párrafo 1, fracción IX, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco; en razón de que existe justificación en la diferencia de las



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

funciones que realizan presidentes y síndicos municipales, frente a regidores de un ayuntamiento.

La señora Ministra Piña Hernández observó que el proyecto reconoce la validez de los preceptos en función de una libertad configurativa; sin embargo, la norma en concreto especifica que, para ser presidente municipal, regidor y síndico se requiere no ser servidor público, a no ser que se separe del cargo noventa días antes de la elección “salvo que se trate de regidores que buscan reelegirse” —porción normativa impugnada—, recordando que, en los precedentes, se ha interpretado en el sentido de incluir a todos los funcionarios o excluirlos a todos en esa separación del mismo cargo para su reelección. Así, al haber pronunciamiento expreso sobre la reelección y al contener esta norma esa misma figura, congruente con su votación en los precedentes, estará en contra del proyecto y por la invalidez de la norma.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena concordó con la señora Ministra Piña Hernández en que, en el ámbito de libertad configurativa, el tema de la reelección no requiere la separación del cargo; sin embargo, en el caso particular, no encontró razonabilidad para distinguir entre presidente municipal, síndico y regidor, por lo que estaría por la invalidez de la norma.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo recordó que un tema similar se analizó en la acción de inconstitucionalidad 29/2017 y sus acumuladas, en la que se



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

registró un empate a cinco votos, al no contar con la presencia de la señora Ministra Luna Ramos.

El señor Ministro Cossío Díaz apuntó que, de acuerdo a su votación en ese precedente y por cómo quedaría el proyecto, votaría por la invalidez del precepto.

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que un precedente más reciente es la acción de inconstitucionalidad 40/2017 y sus acumuladas, en el que se resolvió que la diferencia entre diputados y presidentes municipales, en cuanto a la disposición de separación del cargo para buscar su reelección, se justificaba por la importancia de atender los asuntos de su competencia, por lo que sugirió invocar este precedente en el que se reconoció la validez de una disposición similar.

La señora Ministra Luna Ramos apuntó que se listó para hoy un asunto bajo su ponencia, en el que se propone declarar la invalidez de la falta de separación del cargo a quienes se vayan a buscar otro cargo o a reelegirse, al entenderse que, de lo contrario, sería una forma de hacer promoción en el momento en que se tiene un cargo de esta naturaleza. En el caso concreto, no debe de haber una diferencia entre el presidente municipal, el síndico y el regidor porque, al final de cuentas, aunque dos primeros no buscarán una reelección, sino ocupar un cargo distinto, y el tercero buscará reelegirse, no se les debe dar un trato diferenciado, por lo que el artículo debiera invalidarse.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó por la invalidez del precepto, como votó en el precedente aludido, aclarando que no se pronuncia sobre la separación o no de los servidores públicos, sino por razón de que diferencia entre servidores públicos.

El señor Ministro Medina Mora I. no compartió el proyecto, dado que el trato diferenciado no se justifica, por las razones aducidas por la señora Ministra Luna Ramos, por lo que votará por la invalidez de los preceptos.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto para proponer la invalidez de las normas impugnadas, en tanto que no se justifica el trato diferenciado entre presidentes municipales, síndicos y regidores.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó de acuerdo con la propuesta modificada, con algunas consideraciones adicionales que aportará en un voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando décimo, relativo a la exigencia para separarse del cargo, en caso de reelección, de presidentes y síndicos municipales, consistente en declarar la invalidez de los artículos 74, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 11, párrafo 1, fracción IX, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, en sendas porciones normativas “salvo que se trate de regidores que buscan reelegirse.”, la cual se



aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando décimo primero, relativo a las exigencias para participar en el procedimiento de asignación de regidores por el principio de representación proporcional.

En su parte primera, el proyecto propone declarar la invalidez del artículo 75, en la porción normativa “En el caso de los partidos políticos se requerirá adicionalmente que hubieren registrado planillas en el número de ayuntamientos que determine la ley”, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en razón de que, de acuerdo con el criterio sustentado en las acciones de inconstitucionalidad 50/2016 y sus acumuladas, vulnera el artículo 35, fracción II, constitucional, dado que limita el derecho a ser votado de los ciudadanos de forma injustificada y exige requisitos que exceden el ámbito propiamente municipal, sujetando la representación de las minorías al cumplimiento de requisitos a nivel estatal, esto es, establecer una limitante que rebasa el ámbito municipal correspondiente, en la que no se toman en cuenta los votos conforme a los cuales se hará la distribución respectiva, en tanto que son los emitidos en un



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

municipio en particular, lo que constituye un obstáculo que resta valor a los votos emitidos por los habitantes.

En su parte segunda, el proyecto propone reconocer la validez del artículo 75, en la porción normativa “votación total emitida”, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, con la interpretación conforme propuesta; en razón de que, tomando en consideración lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 55/2016, cuando la norma controvertida establece que todo partido político que alcance, por lo menos el tres punto cinco por ciento de la votación total emitida, tendrá derecho a que le sean asignados diputados de representación proporcional, se debe entender en el sentido de que sólo se tomarán en cuenta los votos que tuvieron efectividad para elegir a los munícipes de mayoría relativa, lo cual implica excluir los votos nulos y los de candidatos no registrados, pues este tipo de sufragios no son eficaces para realizar dicho cómputo.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó de acuerdo en la primera parte, pero externó dudas respecto de la segunda parte y su propuesta de interpretación conforme, puesto que los componentes de la votación válida emitida no quedan claros en la propia legislación impugnada, por lo que se afecta el principio de certeza y, por ende, votará por la invalidez del precepto correspondiente.

La señora Ministra Piña Hernández se expresó de acuerdo con el proyecto y, respecto del tema de la votación total emitida, recordó que se declaró infundado un



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

argumento al proponer la interpretación de la votación total emitida.

El señor Ministro Medina Mora I. se pronunció en favor de la primera parte y en contra de la segunda parte.

El señor Ministro Pérez Dayán concordó con la primera parte del proyecto. En cuanto a la segunda parte, estimó que el sustento no debiera ser la acción de inconstitucionalidad 55/2016, sino el concepto ampliado de “votación total emitida”, es decir, excluyendo no sólo los votos nulos y los de candidatos no registrados, sino también los de candidatos independientes y los de partidos que, en su caso, no alcanzaron un reparto por la fórmula de representación proporcional, como se votó en la acción de inconstitucionalidad 40/2017 y sus acumuladas.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales estimó que el sustento podrían ser las acciones de inconstitucionalidad 77/2015 y su acumulada y 45/2015 y sus acumuladas, en cuanto al concepto de votación total emitida.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo recordó que en la acción de inconstitucionalidad 40/2017 y sus acumuladas se debatieron los conceptos de votación válida emitida o votación total emitida, para determinar si se ajustaba al precedente de la acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas o a la 55/2016. Recordó que el resultado fue un empate a cinco votos, por lo que no se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

definió cuál precedente imperaría. En el caso concreto, la propuesta se ajusta a la 55/2016.

La señora Ministra Luna Ramos concordó con la primera parte del proyecto. Por lo que ve a la segunda parte, recordó que en los precedentes, ante los errores gramaticales o mecanográficos de las legislaturas estatales, consistentes en establecer los conceptos de votación válida emitida y votación total emitida, se ha interpretado que se trata de la votación en la que se descuentan los votos nulos, de candidatos independientes, de candidatos no registrados y de partidos políticos que no alcanzaron el porcentaje necesario para representación proporcional, por lo que, sobre esa base estaría con el proyecto, en todo caso, con un voto concurrente.

La señora Ministra Piña Hernández recordó que en un tema anterior de este mismo asunto se determinó declarar infundado un concepto de invalidez, en razón de que, conforme al artículo 15, fracción II, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, la votación válida emitida es la que resulta de deducir de la votación total emitida, los votos nulos y los de candidatos no registrados, al margen de lo que esta Suprema Corte ha definido como votación válida emitida, pues no se ha llegado a un consenso.

El señor Ministro Cossío Díaz apuntó que en la página ciento sesenta y ocho del proyecto se lee que “Esto pues, cuando la norma controvertida determina que todo partido



político que alcance por lo menos el tres punto cinco por ciento de la votación total emitida, tendrá derecho a que le sean asignados diputados de representación proporcional, debe entenderse en el sentido de que sólo se tomarán en cuenta, para los efectos de la aplicación de este precepto, los votos que tuvieron efectividad para elegir a los munícipes de mayoría relativa, lo cual implica excluir los votos nulos y los de los candidatos no registrados, pues este tipo de sufragios tampoco son eficaces para realizar el cómputo ni a favor ni en contra de candidato alguno”, lo que implica una interpretación conforme que no compartió, al resultar excesiva y afectar el principio de certeza, por lo que estaría en contra de la segunda parte.

El señor Ministro Franco González Salas estimó que ambos temas se vinculan directamente, estimando que se vulnera el principio de certeza, es decir, si por un lado se introduce una votación del tres punto cinco por ciento y, por otro lado, se usa el concepto de votación total emitida, que no ha definido esta Suprema Corte respecto de los artículos 41 y 116 constitucionales. Ante ello, indicó que el artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece claramente que “1. Se entiende por votación total emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

registrados”, por lo que se debe asumir ese concepto. Consecuentemente, se inclinó por la invalidez de los preceptos, por falta de certeza jurídica.

El señor Ministro Pérez Dayán recapituló que la votación en la acción de inconstitucionalidad 40/2017 y sus acumuladas fue dividida en cuanto al precedente que sustentaría el concepto, pues tanto la acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas como la 55/2016 contienen criterios disímiles. En ese contexto, se pronunció por la validez del precepto en cuestión, pero en razón de la definición de la citada 53/2015, no de la 55/2016 y, si se sostiene el proyecto con base en esta última, tendría que votar en contra. Recordó que, en aquella ocasión, ante la votación dividida y las razones interpretativas ambiguas, optó por dar la razón a la accionante, en cuanto a que el precepto viola la certeza.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se manifestó conforme con la propuesta.

La señora Ministra Piña Hernández apuntó que la legislación de Jalisco diferenció entre votación total emitida y votación válida emitida, por lo que, si en el caso se trata de la votación total emitida, debe entenderse como a la que se deducen los votos nulos y los de candidatos no registrados. En ese sentido, se pronunció por la invalidez del precepto, pero no por falta de certeza, sino porque para la asignación del porcentaje, se toman en cuenta todos los votos, sin excluirse los mencionados.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando décimo primero, relativo a las exigencias para participar en el procedimiento de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, respecto de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de su parte primera, consistente en declarar la invalidez del artículo 75, en la porción normativa “En el caso de los partidos políticos se requerirá adicionalmente que hubieren registrado planillas en el número de ayuntamientos que determine la ley”, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Se expresó una mayoría de seis votos en contra de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I. y Pérez Dayán, respecto de su parte segunda, consistente en reconocer la validez del artículo 75, en la porción normativa “votación total emitida”, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, con la interpretación conforme propuesta. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales votaron a favor.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por tanto, la votación definitiva respecto de la referida porción normativa deberá indicar:

Se expresó una mayoría de seis votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I. y Pérez Dayán, por declarar la invalidez del artículo 75, en la porción normativa “votación total emitida”, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, respecto del considerando décimo primero, relativo a las exigencias para participar en el procedimiento de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, en su parte segunda. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales votaron en contra.

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del artículo 75, en la porción normativa “votación total emitida”, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando décimo segundo, relativo a la cancelación de registro de los candidatos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En su parte primera, el proyecto propone declarar la invalidez del artículo 253, párrafo 1, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco; en razón de que establece la cancelación del registro de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, a los partidos políticos o coaliciones que no presenten completas las listas de diputados por el principio de representación proporcional, sin requerimiento alguno y sin previo aviso para el candidato o partido político que lo haya postulado, lo que constituye una violación al derecho de votar en sus vertientes activa y pasiva, reconocidos en el artículo 35, fracciones I y II, constitucional.

En su parte segunda, el proyecto propone reconocer la validez del artículo 253, párrafo 2, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco; en razón de lo que se interpretó en el considerando noveno, relativo a la paridad horizontal.

El señor Ministro Franco González Salas observó que en su página ciento setenta, el proyecto apunta que “Por lo que las dos sanciones son contrarias al derecho humano a ser votado, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez, no consideró que, previo al acto privativo, se debe conceder el derecho de audiencia a los posibles afectados ante el incumplimiento”, de lo cual valoró que cabe una interpretación sistémica, en el sentido de que se les notificará, para determinar que el precepto es válido.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo sostuvo su proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando décimo segundo, relativo a la cancelación de registro de los candidatos, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con precisiones, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de su parte primera, consistente en declarar la invalidez del artículo 253, párrafo 1, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. El señor Ministro Franco González Salas votó en contra. El señor Ministro Medina Mora I. anunció voto concurrente.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con precisiones, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto de su parte segunda, consistente en reconocer la validez del artículo 253, párrafo 2, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. Los señores Ministros Franco González Salas y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro Medina Mora I. anunció voto concurrente.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando décimo tercero, relativo a la prohibición de los candidatos para ser representados en medios de impugnación. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 612, párrafo 1, en la porción normativa “sin que sea válida representación alguna”, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco; en razón de que, al resolverse las acciones de inconstitucionalidad 94/2016 y su acumulada y 40/2017 y sus acumuladas, se estimó que un precepto similar limitaba injustificadamente el derecho de acceso a la justicia, con base en la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando décimo tercero, relativo a la prohibición de los candidatos para ser representados en medios de impugnación, consistente en declarar la invalidez del artículo 612, párrafo 1, en la porción normativa “sin que sea válida representación alguna”, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, la cual se aprobó en votación económica por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Medina Mora I. votó en contra.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las doce horas con cincuenta y siete minutos y reanudó la sesión a las trece horas con veinticinco minutos.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos indicó que, atendiendo a las votaciones alcanzadas, la propuesta modificada del considerando décimo cuarto, relativo a los efectos, deberá determinar que las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando décimo cuarto, relativo a los efectos, consistente en determinar que las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

“PRIMERO. Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 38/2017, 39/2017 y 60/2017. SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 38/2017, respecto de los artículos 15, numeral 1, fracción IV, 19, numerales 1, fracciones III y IV y, 3; 20, numeral 1, 21, numeral 1 y 22, numeral 1, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. TERCERO. Se desestima la acción de inconstitucionalidad 60/2017, respecto de la impugnación del artículo 75, en la porción normativa ‘votación total emitida’, de la Constitución Política del Estado de Jalisco. CUARTO. Se reconoce la validez del proceso legislativo del Decreto número 26374/LXI/17, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, en términos del considerando séptimo de este fallo. QUINTO. Se reconoce la validez de los artículos 13, fracción IV, incisos a) y b), y 73, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como de los artículos 5, numeral 1, en la porción normativa ‘en candidaturas a presidencias municipales,’ 24, numeral 3, párrafo tercero, 89, numeral 2, 237, numeral 5, y 253, numeral 2, del Código Electoral y de Participación Social de dicha entidad federativa. SEXTO. Se declara la invalidez de los artículos 74, fracción IX, en la porción normativa ‘salvo que se trate de regidores que buscan reelegirse,’ y, 75, en la porción normativa ‘En el caso de los partidos políticos se requerirá adicionalmente que hubieren registrado planillas en el número de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ayuntamientos que determine la ley', de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como de los artículos 11, numeral 1, fracción IX, en la porción normativa 'salvo que se trate de regidores que buscan reelegirse.', 253, numeral 1, y 612, numeral 1, en la porción normativa 'sin que sea válida representación alguna', del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. SÉPTIMO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Jalisco. OCTAVO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta".

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, reservando el derecho de los señores Ministros de formular los votos que consideren pertinentes.



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:

**II. 54/2017 y
acs.
55/2017 y
77/2017**

Acción de inconstitucionalidad 54/2017 y sus acumuladas 55/2017 y 77/2017, promovidas por los Partidos Políticos MORENA y Conciencia Popular de San Luis Potosí, demandando la invalidez de diversas disposiciones de las Leyes Electoral y de Justicia Electoral, ambas del mencionado Estado, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, mediante Decreto 0653. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso:

“PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas la acción de inconstitucionalidad 54/2017 y sus acumuladas 55/2017 y 77/2017. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracción II, inciso c), 27 fracciones II, III, IV y V; 28, fracción II; Capítulo V, 34, 44, fracción II, inciso q), 74, fracción II, inciso m), 90, fracción IV, 91, 191, fracciones IV, inciso b) y e) y f), 193, 218, fracción X y XV, 220 y 305, párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; así como, los artículos 94, 95, 96 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí. TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 152, fracción I, inciso e), de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que indica “el cinco por ciento”, pues debe contemplarse “el tres por ciento”, tal como se prevé en el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V, de la Ley General de Partidos Políticos; así como declarar la invalidez del inciso f) de la citada fracción, que prevé “f) Para la capacitación, promoción y el desarrollo



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

del liderazgo político de los jóvenes, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario”, determinación que surtirá efectos a partir de que se notifiquen los presentes puntos resolutivos al Congreso del Estado de San Luis Potosí. CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a la precisión de la litis, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno al considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea opinó que debería sobreseerse respecto de los artículos 218, fracción VIII, y 220 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, toda vez que fueron derogados mediante decreto publicado



El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial del Estado.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo reconoció no tener ese dato, pero estaría por el sobreseimiento propuesto.

El señor Ministro Franco González Salas corroboró la información aportada por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea.

La señora Ministra Luna Ramos apuntó que quizás impugnaron su derogación.

El señor Ministro Cossío Díaz pidió tiempo para revisar el decreto aludido.

El señor Ministro Medina Mora I. apuntó que al principio en el proyecto se enlistan todos los preceptos impugnados, incluidos los dos precisados, pero en su apartado de precisión de la litis, no aparece el 218, fracción VIII, sino únicamente el 220.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales apuntó que en el decreto referido aparecen derogados totalmente los artículos 218, fracción VIII, y 220.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena indicó que se impugnó la derogación del artículo 220.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales acordó dejar encorchetado este considerando.



El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando sexto, relativo al tema 1, denominado “Alianza partidaria. Transferencia de votos y Emblema común de los institutos políticos que participan bajo la figura de alianza partidaria”. El proyecto propone reconocer la validez de los artículos 191, fracción IV, incisos b) y e), y 193 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; en razón de que: 1) bajo el principio de libertad configurativa, se permite que los Estados regulen la figura de alianzas partidarias a través de convenios aprobados por los órganos electorales locales, 2) no se afectan los principios de certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral al amparar, en esa libertad configurativa, la posibilidad de que los convenios contengan las reglas sobre la distribución de los votos a favor de un candidato en alianza para los partidos políticos postulantes, y 3) porque se respeta la voluntad del elector en relación con los efectos de su voto, al tener previo conocimiento del mecanismo de distribución con base en un convenio previamente publicado y aprobado.

Abundó que en la acción de inconstitucionalidad 40/2014 y sus acumuladas se consideró constitucional la regulación del Estado de San Luis Potosí de la figura de las alianzas partidarias, en el que se hizo la distinción de tal figura con la de la coalición. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 59/2014 se resolvió en el sentido de que es posible que las legislaturas de los Estados permitan la distribución a través de un convenio para candidaturas comunes.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó en contra del proyecto, de conformidad con sus votaciones en precedentes, en el sentido de que existe una reserva de fuente para que este aspecto se regule en las constituciones locales, por lo que anunció voto particular.

Asimismo, anunció voto concurrente general.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales consideró que el precedente de la acción de inconstitucionalidad 40/2014 y sus acumuladas no es exactamente aplicable al caso, por lo que estaría de acuerdo en reconocer la validez de los preceptos impugnados.

El señor Ministro Pérez Dayán se pronunció en contra de las consideraciones del proyecto porque, bajo la denominación de “alianzas”, se genera una especie de coalición que, en ocasiones parecería un frente o candidatura común, por lo que aparenta ser una forma de evadir un criterio de esta Suprema Corte, en el sentido de que los Estados no pueden regular las coaliciones. Por lo que hace al tema de la transferencia de votos, apuntó que el artículo 191, fracción IV, inciso e) apunta que “La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la alianza partidaria, para efectos de la conservación del registro, para el otorgamiento del financiamiento público y, en su caso, para la asignación de representación proporcional, y otros aquellos que establezca esta Ley”, por lo que estimó que resultaría un fraude a la ley respecto de la representatividad de un partido frente a la



sociedad, en cuanto al aspecto de la conservación del registro.

El señor Ministro Medina Mora I. estimó que existe reserva de fuente y que se trata de una coalición disfrazada, por lo que votará en contra.

El señor Ministro Cossío Díaz recordó que en la acción de inconstitucionalidad 17/2015 y su acumulada se analizó el emblema común; sin embargo, se diferencia de la acción de inconstitucionalidad 40/2014 y sus acumuladas, en las que se analizó la transferencia de votos y su impacto en la representatividad, por lo que valoró que tiene razón el promovente y, en ese sentido, estará por la invalidez de los preceptos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando sexto, relativo al tema 1, denominado “Alianza partidaria. Transferencia de votos y Emblema común de los institutos políticos que participan bajo la figura de alianza partidaria”, consistente en reconocer la validez de los artículos 191, fracción IV, incisos b) y e), y 193 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, la cual se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Medina Mora I. y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto particular.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando séptimo, relativo al tema 2, denominado “Eliminación del financiamiento público a las agrupaciones políticas estatales”. El proyecto propone reconocer la validez de los artículos 3, fracción II, inciso c), 34, 44, fracción II, inciso q), 74, fracción II, inciso m), 90, fracción IV, 218, fracciones X, párrafo segundo, y XV, párrafo segundo, y 220 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; en razón de que la eliminación de otorgamiento de financiamiento público para las agrupaciones políticas no resulta inconstitucional, en tanto que no existe una obligación de otorgar financiamiento a ese tipo de asociaciones, por lo que los Estados cuentan con libertad configurativa para su organización, regulación y financiamiento; asimismo, dicha eliminación no viola el artículo 14 constitucional, pues no existen derechos adquiridos que se vean afectados ni que el referido derecho se encuentre sujeto al principio de progresividad.

Se aclara que no es obstáculo que el artículo 219, fracción V, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establezca que las agrupaciones políticas tengan derecho a gozar de financiamiento público, pues dicha hipótesis normativa corresponde a la regulación previa a la reforma que se analiza. Al respecto, viene a colación el tema encorchetado, en relación con los artículos 218, fracción VIII, y 220, porque antes de su derogación preveían la posibilidad de un financiamiento público a este tipo de agrupaciones políticas, que es lo que en realidad se impugna.



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Modificó el proyecto para reconocer la validez de la derogación de los artículos 218, fracción VIII, y 220 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció a favor del proyecto con la aclaración realizada.

La señora Ministra Luna Ramos corroboró que, en la demanda de la acción de inconstitucionalidad, se impugnó que no podría subsistir el artículo 219 si ya se habían derogado los diversos 218, fracción VIII, y 220.

El señor Ministro Cossío Díaz sugirió eliminar las comparaciones entre agrupaciones políticas y agrupaciones políticas nacionales, dada la libertad de configuración.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto con la sugerencia realizada.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando séptimo, relativo al tema 2, denominado “Eliminación del financiamiento público a las agrupaciones políticas estatales”, consistente en reconocer la validez de los artículos 3, fracción II, inciso c), 34, 44, fracción II, inciso q), 74, fracción II, inciso m), 90, fracción IV, 218, fracciones VIII (por su derogación), X, párrafo segundo, y XV, párrafo segundo, y 220 (por su derogación) de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos,



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando octavo, relativo al tema 3, denominado “Fecha máxima para la instalación de las Comisiones Distritales y Comités Municipales Electorales”. El proyecto propone reconocer la validez del artículo 91 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; en razón de que, si bien la ley electoral impugnada establece que el proceso electoral inicia en el mes de septiembre del año anterior al de la jornada electoral, no necesariamente en esa fecha deben estar instaladas las Comisiones Distritales y Comités Municipales, pues los actos preparatorios se encuentran garantizados con las facultades que la ley le confiere al Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sin que estos deban necesariamente ser ejecutados por los organismos denominados Comisiones Distritales Electorales y Comités Municipales Electorales, además de que el precepto no limita a que las comisiones puedan instalarse antes de esa fecha, sino que se pretende otorgar certeza de que, en esa fecha, deben encontrarse instaladas.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que en la ley hay dos artículos que tratan de su instalación desde noviembre del año anterior al de la elección, el 112, párrafo primero —“El Consejo instalará a los Comités a más tardar el último día del mes de noviembre del año anterior al de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

elección”—, y 286, fracción I —“El proceso de las elecciones ordinarias de Gobernador, diputados, y ayuntamientos, comienza a partir de la sesión del Pleno del Consejo celebrada durante la primer semana del mes de septiembre del año anterior al de la elección; y culmina con la declaración de validez formal pronunciada por el Pleno, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 31 de la Constitución del Estado, y el artículo 44 fracción II inciso I) de esta Ley. Sus fases serán: I. Proveer la debida integración de las comisiones distritales electorales, comprobando la legal instalación de éstas, a más tardar el último día del mes de noviembre del año anterior al de la elección”—.

Por ello, estimó que los accionantes tienen razón en que no se está dando el tiempo suficiente para su instalación al preverlas hasta el mes de enero, sino que deberían de estar instalados desde noviembre.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto para proponer la validez del artículo 91 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, a través de una interpretación integral y sistemática, en el sentido de que el mes de enero será la fecha límite para la instalación de las Comisiones Distritales y Comités Municipales Electorales, sin menoscabo de que pueda instalarse con anterioridad, como apuntan otros preceptos del mismo ordenamiento.

La señora Ministra Luna Ramos concordó con el proyecto modificado.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando octavo, relativo al tema 3, denominado “Fecha máxima para la instalación de las Comisiones Distritales y Comités Municipales Electorales”, consistente en reconocer la validez del artículo 91 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, a través de una interpretación integral y sistemática, en el sentido de que el mes de enero será la fecha límite para la instalación de las Comisiones Distritales y Comités Municipales Electorales, sin menoscabo de que pueda instalarse con anterioridad, como apuntan otros preceptos del mismo ordenamiento, la cual se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando noveno, relativo al tema 4, denominado “Recurso de reconsideración”. El proyecto propone reconocer la validez de los artículos 27, fracción IV, 28, fracción II, 94, 95 y 96 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí; en razón de que se prevé la tramitación de un recurso de reconsideración contra los autos y providencias dictadas por la Sala, previas al dictado de la sentencia, y que causen un perjuicio a quien, teniendo interés jurídico, lo promueve, por lo que su finalidad fue establecer una adecuada defensa, contrario a lo que se



afirma en los conceptos de invalidez, esto es, que el único objeto de dicho recurso fuera retardar la resolución del recurso principal, dado que para su tramitación se prevén plazos breves y fatales, además de que, con la interposición del recurso, no se detiene el procedimiento ni se prevé la suspensión del mismo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando noveno, relativo al tema 4, denominado “Recurso de reconsideración”, consistente en reconocer la validez de los artículos 27, fracción IV, 28, fracción II, 94, 95 y 96 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando décimo, relativo al tema 5, denominado “Restricción al destino del financiamiento público”. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 152, fracción I, incisos e) y f), de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; en razón de que no es acorde con la Constitución Federal, la cual establece que las leyes de los Estados en materia de financiamiento deberán ser acordes con las bases previstas en los artículos 50 a 54 de la Ley General de Partidos Políticos, y 116, fracción IV, inciso g),



constitucional, conforme a los cuales, el financiamiento para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres debe ser del tres por ciento, no del cinco por ciento y, respecto de la capacitación a los jóvenes, no existe regulación, de conformidad con lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 5/2015.

La señora Ministra Piña Hernández se apartó del proyecto porque no resulta aplicable dicho precedente, al margen de que no participó en la discusión, además de que de la lectura de los artículos 41 y 116 constitucionales no se advierte que exista una regla o principio que establezca una directriz a las legislaturas locales a efecto de determinar la forma en que los partidos políticos deben disponer de su financiamiento, por lo que, en principio, hay una libertad de configuración legislativa, siendo que, en todo caso, se debe analizar la razonabilidad del cumplimiento de los fines constitucionales.

Señaló que, dentro de estos fines, el artículo 116, fracción IV, constitucional establece diversos parámetros, por ejemplo, que se tiene que destinar al menos el dos por ciento del financiamiento público para el desarrollo de actividades específicas; por lo que surge el problema de si el artículo 51, párrafo 1, inciso a), fracción V, de la Ley General de Partidos Políticos debe interpretarse como un mandato de carácter taxativo, es decir, acatarse estrictamente en su literalidad o, por el contrario, entenderlo como un mínimo. Opinó que no existe ningún elemento que permita afirmar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que se trata de un límite taxativo, de tal suerte que los Congresos locales tienen que establecer necesaria y forzosamente el tres por ciento de su financiamiento para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres; agregó que resultaría armónica una interpretación en la que se sostenga que dicho porcentaje es una base y, en consecuencia, un mínimo, dada la finalidad que se persigue con dicho mandato; pero no debe entenderse como un límite hacia arriba, pues resultaría contrario a un enfoque proteccionista, en tanto que no permitiría que un Congreso local amplíe este ámbito de tutela, buscando un mayor nivel de liderazgo de este sector de la sociedad, por lo que deberá estar sujeto a un límite o criterio de razonabilidad, mas no es el caso de la norma impugnada.

En este sentido, votará en contra del proyecto y por la validez del precepto que se está analizando.

La señora Ministra Luna Ramos apuntó que dicha ley general establece el tres por ciento, mientras que la ley impugnada prevé el cinco por ciento para la capacitación, promoción, desarrollo y liderazgo de las mujeres, por lo que, al tratarse de una acción positiva en favor de las mujeres, tendente a lograr que tengan más acceso a puestos de elección popular, además de que no vulnera ningún precepto constitucional, por lo que se manifestó en contra del proyecto, y por considerar válida la norma en cuestión.



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Cossío Díaz concordó con las señoras Ministras Piña Hernández y Luna Ramos, por lo que estará en contra del proyecto.

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que, por más simpatía que se tenga por las acciones afirmativas, deben estar sujetas al orden constitucional. En el caso concreto, recordó que se acaba de interpretar, en líneas generales, que el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, debe ser entendido en el sentido de que, salvo disposición en contrario, resulta aplicable a los partidos políticos nacionales y locales; de manera que, si su fracción V prevé que “Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario”, se entiende que hay libertad de configuración favorable al Estado, siendo que previó el cinco por ciento, en lugar del tres. Con ello, destacó que la acción afirmativa del caso coincide también con la interpretación recién aprobada por este Tribunal Pleno.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recapituló que son dos temas: mujeres y jóvenes, siendo que únicamente se han pronunciado acerca del primero.

La señora Ministra Piña Hernández recalcó que la Ley General de Partidos Políticos resulta ser un mínimo, pero puede preverse más. En el caso concreto, tres por ciento es un piso y puede aumentarse con libertad configurativa, siempre y cuando sea razonable la medida. Aclaró que, si



sólo se refirió a las mujeres, puede incluirse a los jóvenes en su argumentación.

La señora Ministra Luna Ramos concordó que, en el caso de los jóvenes, tampoco se excederían los lineamientos de dicha ley general.

El señor Ministro Franco González Salas distinguió que la norma refiere exclusivamente al financiamiento que otorga el Estado correspondiente a los partidos políticos, no al financiamiento que puedan tener los partidos políticos nacionales a nivel federal, por lo que, si el Estado ha determinado que se debe apoyar a las mujeres y a los jóvenes en esta proporción, no se da ninguna inconstitucionalidad por violación a precepto de la Constitución Federal alguno ni a la libertad de configuración del Estado.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció por la validez de ambos preceptos.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se expresó en el mismo sentido.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto para reconocer la validez del precepto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando décimo, relativo al tema 5, denominado “Restricción al destino del financiamiento público”, consistente en reconocer la validez



del artículo 152, fracción I, incisos e) y f), de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, la cual se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek y Pérez Dayán. Los señores Ministros Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales votaron en contra.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo presentó el considerando décimo primero, relativo al tema 6, denominado “Lista de candidatos a regidores de representación proporcional en la elección de ayuntamientos, por lo menos el 20% de ciudadanos jóvenes menores de veintinueve años de edad cumplidos el día de la designación”. El proyecto propone reconocer la validez del artículo 305, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; en razón de que existe libertad configurativa por parte de los Estados y no se advierte la existencia de un parámetro irrazonable en la ley, la cual pretende ser incluyente con un grupo, con condiciones particulares, conforme a lo cual se garantiza la representación integral y genérica de los intereses de la colectividad.

El señor Ministro Cossío Díaz se pronunció en contra porque no hay justificación para establecer ese porcentaje, salvo por la condición de la edad, por lo que anunció voto en contra del proyecto.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Franco González Salas agregó que se debe reflexionar si los Estados pueden imponer este tipo de obligaciones a los partidos políticos nacionales para contender en las elecciones locales. Al respecto, estimó que no pueden y, consecuentemente, estará en contra del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del décimo primero, relativo al tema 6, denominado “Lista de candidatos a regidores de representación proporcional en la elección de ayuntamientos, por lo menos el 20% de ciudadanos jóvenes menores de veintinueve años de edad cumplidos el día de la designación”, consistente en reconocer la validez del artículo 305, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, la cual se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. con consideraciones diferentes, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales con consideraciones adicionales. Los señores Ministros Cossío Díaz y Franco González Salas votaron en contra. El señor Ministro Presidente Aguilar Morales anunció voto concurrente.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo apuntó que, dado que no prosperó ninguna propuesta de invalidez, no habría que precisar efectos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

“PRIMERO. Son procedentes pero infundadas las acciones de inconstitucionalidad 54/2017 y sus acumuladas 55/2017 y 77/2017. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracción II, inciso c), 34, 44, fracción II, inciso q), 74, fracción II, inciso m), 90, fracción IV, 91, 152, fracción I, incisos e) y f), 191, fracción IV, incisos b) y e), 193, 218, fracciones VIII (por su derogación), X, párrafo segundo, y XV, párrafo segundo, 220 (por su derogación) y 305, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; así como los artículos 27, fracción IV, 28, fracción II, 94, 95 y 96 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.



Sesión Pública Núm. 78

Lunes 28 de agosto de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Acto continuo, levantó la sesión a las catorce horas con veintisiete minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el martes veintinueve de agosto del año en curso, a las diez horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cétina, secretario general de acuerdos, quien da fe.



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN